

c/ Paulina Alejandra Castillo Castillo

Tráfico ilícito de drogas

RUC: N° 2201076660-9

RIT: N° 88-2023

Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro.

El día veintidós del presente mes y año ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrado por los magistrados que suscriben se llevó a efecto la audiencia de juicio oral de la causa RIT N° 88-2023, RUC N° 2201076660-9, seguida por el Ministerio Público en contra de **Paulina Alejandra Castillo Castillo**, cédula de identidad N° 14.111.330-5, chilena, nacida en Antofagasta el 27 de agosto de 1979, actualmente de 44 años, soltera, vendedora informal según sus dichos, con domicilio en calle Progreso N° 5662, Población El Golf, Antofagasta.

La acción penal fue sostenida por el Ministerio Público representado por el fiscal don Pablo Sabaj Diez. Por su parte, la defensa de la acusada estuvo a cargo de la Defensora Penal Pública doña Alicia Corvalán Curuchet.

Considerando:

Primero: Acusación. La imputación fáctica efectuada por el ente persecutor en contra de la acusada, según el correspondiente auto de apertura del juicio oral, es del siguiente tenor:

“El día 30 de octubre de 2022, alrededor de las 20:40 horas, al interior de la pieza N° 6 de la Residencial La Cabaña ubicada en Nicasio Retamales N° 236, comuna de Estación Central, la imputada Paulina Alejandra CASTILLO CASTILLO mantenía en su poder, guardada debajo de una de las camas una maleta de color azul, en cuyo interior se encontraron cuatro bolsas de un material sintético color negro, contenedoras de un total de treinta bolsas transparentes contenedoras de 30 kilos y 200 gramos de cocaína base”.

A juicio del Ministerio Público, los hechos antes descritos, son constitutivos del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3, en relación con el artículo 1, ambos de la Ley N° 20.000, en grado de consumado,

correspondiéndole a Castillo Castillo participación en calidad de autora, en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal.

Sostuvo el instructor, en su escrito acusatorio, que no concurrían circunstancias modificatorias de responsabilidad, por lo que, su pretensión punitiva se circunscribió a la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio, multa de 100 (cien) Unidades Tributarias Mensuales, las penas accesorias legales, el comiso y el pago de las costas de la causa.

En sus alegaciones durante el juicio oral, el Ministerio Público ratificó su petición de tener por cierta la existencia del núcleo fáctico descrito en la acusación, su tipicidad de conformidad a la normativa señalada y la participación culpable de la acusada en dichos hechos, explicitando el gran volumen de droga incautada como la peligrosidad de la misma, modificando su pretensión punitiva en la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, luego de dejar a criterio del tribunal la minorante del artículo 11 N°9 del Código Penal, solicitando, además, el comiso del dinero incautado conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N°20.000, correspondiendo una pena de cumplimiento efectivo conforme al marco punitivo a imponer.

Segundo: Defensa. Por su parte, la defensa de la acusada, tanto en la apertura como en la clausura, manifestó la intención de su representada de colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

En la audiencia prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, luego de haber sido reconocida, por mayoría, la minorante del artículo 11 N°9 del Código Penal, instó por la aplicación de la pena en el mínimo contemplado para el delito, requiriendo la rebaja de la multa a imponer más allá del mínimo establecido por la ley, atendida la precaria situación de su representada quien ha permanecido privada de libertad durante toda la secuela del juicio y se encuentra patrocinada por la Defensoría Penal Pública.

Todas las alegaciones serán analizadas detalladamente en la presente sentencia, en la oportunidad que corresponda.

Tercero: Declaración de la acusada Paulina Alejandra Castillo Castillo. Que debidamente informada de sus derechos, la acusada renunció al de guardar silencio y declaró en estrados que el día 29 se vino a Santiago, llegó en la noche de ese día, le mandaron la ubicación, llegó “al Borja”, compró la maleta y habló con un amigo que le entregaría la droga, éste le dio la ubicación, llegó en un taxi, allí rescató los kilos y el chofer del taxi le recomendó la residencia; se acostó y, al otro día, esperaba a una niña que se devolvería con la maleta a Antofagasta; explica que esta persona es drogadicta, la fue a buscar a las 7:00 de la mañana al Terminal Sur, desayunaron; indicó que le preguntó al conserje si le podía cancelar después, porque ella volvería y le pagaría a la vuelta, pues la niña se quedaría allí; detalla que salió y, posteriormente llegó, la policía la estaba esperando. Agregó que, la niña la llamó, le dijo que la echaron de la residencial porque no pagó la pieza, por lo anterior, llamó al conserje, pero éste le dijo que la sacaron por ruidos molestos y como la pieza no estaba desalojada la mucama tenía que entrar a limpiar para dejarla a otra persona, explicando que ella le refería que su equipaje estaba allá, pero le decían que la niña se fue; agregó que, le dijo a la persona que volvería a quedarse, hablaron del pago a la vuelta.

Luego, manifiesta que la dama que entró a hacer la cama le abrió la maleta, detallando que allí no sólo estaba la droga sino que también plata, la que no sabe dónde está; refiere que guardó toda la droga muy amarrada y cerrada en bolsas, no selló la maleta con candado, pero estaba cerrada. Agrega que, al volver comprar la comida la pescaron, allí le dijeron que la maleta estaba semiabierta y que habían visto que contenía bolsas sospechosas, pero indica que la droga estaba en bolsas negras de basura cerradas, por lo que estima no había nada sospechoso para mirar y cree que la mucama se metió a robar.

Al ser interrogada por su defensa, puntualizó que esto sucedió el 29 de octubre del año 2022, llegó a Santiago desde Ovalle; indicó que la maleta que compró era de color azul, de un tamaño grande, como de la altura de la mesa; respecto del nombre del amigo que le entregó la droga, manifestó que éste se llamaba

Rosamel, es boliviano, no sabe nada más de él; él le dio la droga, pasta base, 30 kilos que ya estaban dosificados en bolsas de un kilo; detalló que compró la maleta y bolsas por el mal olor y, por tal motivo, lo puso en varias bolsa y, además, con una bolsa negra amarrada.

Respecto de la droga, explicó que no la compró sino que se la pasaron así no más y se la llevaría a Antofagasta. El lugar en el que se encontraba era una residencial que se llamaba La Cabaña, está cerca del Terminal Sur. En cuanto a la niña drogadicta de la que habló, precisó que la conoce por “flaca”, se la encontró en la plaza de Ovalle, a ella le iba a pedir que se llevara la droga, en el momento se le ocurrió eso, pero después se arrepintió; detalló que ella llegó primero y le compró un pasaje para que se viniera en otro bus distinto al de ella, eso porque no había pasaje en su mismo bus.

Luego señaló que, al volver de comprar, “la pescó la PDI”, eran dos que estaban como sentados tomando té en el hall de la residencial, ella llegó cerca de las siete y media a ocho de la noche, ahí los funcionarios le mostraron la placa, le dijeron “ya, ahora” y ahí ella dijo “Ah, ya cagué”, ahí la hicieron entrar dos o tres funcionarios más, ahí la tomaron detenida y guardó silencio, pero esto que declaró lo dijo a las dos fiscales de garantía, porque quería llegar a un abreviado.

Al ser interrogada por el Ministerio Público, reiteró que viajó el 29 de octubre, partió desde Ovalle, pero vive en Antofagasta, se quedó del 29 al 30, respecto de la maleta, insistió en que la compró al bajarse del bus y que, al llegar al hotel ya entró con la maleta con todo, pero sola; pagó una noche anticipada, la que se quedó. Manifestó que los paquetes —de droga—los fue a buscar antes de llegar a la residencial; le dieron una ubicación y fue, se encontró en una plaza con el boliviano, no en una casa; no se acuerda donde fue eso, porque no es de Santiago, quedaba como a una media hora del terminal; explicó que le mostró la ubicación al chofer del taxi y él la vio, ella no porque no sabe de ubicaciones al no ser de acá. Luego, llegó a la residencial con la maleta cargada con droga, se alojó una noche.

Respecto de la otra mujer, precisó que “la flaca” llegó el mismo día que ella, pero se le perdió, ésta andaba sin celular, llegaba el día 29 a las nueve de la noche, pero la encontró al otro día a las siete de la mañana, pues la llamó una persona extraña que le dijo que una señorita la esperaba en el Terminal Sur; agregó que, llevó a “la flaca” el día 30 en la mañana, se iba a quedar ese día; detalla que salió de la residencial cerca de las 9 de la mañana y le dijeron que no había problema para quedarse; tenía \$179.000 en su cartera con sus joyas, pero ese no es el dinero del que habló, ya que, tenía \$400.000 en la maleta, eso desapareció, ese dinero era de ella, no se lo entregó la persona que le pasó la droga, le entregaron la droga sin pago, en la maleta también guardó parte de su ropa, la dejó ordenadita.

Esta declaración será analizada más adelante al momento de resolver sobre la participación de la encausada y la procedencia de circunstancias modificatorias. Al darle la posibilidad de manifestar sus palabras finales, no agregó nada a lo ya manifestado.

Cuarto: Prueba de cargo y valoración: Teniendo en consideración que el Ministerio Público acusó a la imputada, ya individualizada, en calidad de autora de un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, corresponde referirse a aquellos datos probatorios incorporados por el titular de la acción penal, en los cuales fundó sus alegaciones y que, a juicio de éste, permitían probar la hipótesis reseñada con anterioridad, dejando en claro, desde ya, que la defensa, no discutió la existencia de los presupuestos fácticos esgrimidos por el persecutor ni la participación culpable en ellos de tal acusada.

En lo que dice relación con los hechos materia de la acusación, el Ministerio Público aportó el testimonio de tres funcionarios de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile que participaron en el procedimiento que culminó con la detención de la encausada, el Subcomisario **Germán Fernando Cornejo Reyes**, el Inspector **Gerardo Ignacio Catalán Peña** y el y Comisario **Bernardino Adrián Camousseigh Ramírez**, quienes en forma

conteste, pormenorizada y dando plena razón de sus dichos, relataron el procedimiento por ellos adoptado el día 30 de octubre de 2022, al haber sido alertados por el dueño de una residencial, respecto de una maleta en una de las habitaciones contenedora de una sustancia que podría ser droga.

Cornejo Reyes, explicó que el procedimiento se inicia con la visita del dueño de la residencial La Cabaña que está emplazada en Nicasio Retamales N°236, Estación Central, éste llegó a la guardia de la Brigada Antinarcóticos y manifestó que, uno de sus empleados, en una de las habitaciones, al momento de hacer aseo encontró bajo la cama una maleta de color azul con bolsas de color negro en cuyo interior habían bolsas blancas transparentes con una sustancia en polvo de color amarillento; por lo anterior, se apersonaron a la brevedad, asignando un carro para la diligencia y concurriendo al lugar junto con tres colegas más, el comisario Camousseigh, el Inspector Catalán y la Inspectora Bárbara Salazar; detalla que al llegar se les autoriza el ingreso a la residencial, confeccionan acta de entrada y registro, acceden a las dependencias y el lobby; allí les indican que el día anterior había ingresado Paulina Castillo Castillo, quien ingresó con la maleta azul, entregándole el arriendo de la pieza N°6; por lo anterior y, al no encontrarse la persona de la habitación que se hallaba bajo arriendo, por la puerta que estaba entreabierta y desde el lobby, veían la maleta de color azul, sin que pudiesen revisar el interior, pero se sentía el fuerte olor de la cocaína base; por lo anterior, dividieron el equipo, dos se quedaron en el lobby de la residencial —que era una especie de comedor común— y el comisario Camousseigh y él se quedaron en las afueras del lugar.

Detalla que cerca de las 20:03 horas, llega una mujer con polerón rosado, jeans celeste y zapatillas negras quien ingresa a la residencial; los colegas del interior se percatan que pide llave de la pieza N°6, la mujer ingresa a la pieza, por lo que, se pudo determinar que esa mujer correspondía a Paulina Castillo Castillo. Agrega que, a los diez minutos, la mujer sale en dirección al terminal de buses, compra comida y regresa a la residencial y, al tener ya la certeza que era la mujer que se

estaba denunciando, al regresar se le hace un control, se la identifica como Paulina Castillo Castillo; al decirle que son funcionarios de la policía ella dice “cagué, me voy a ir en cana”, les autoriza el ingreso a la pieza por acta, allí ven la maleta que mantenía tres bolsas de color negro, en cuyo interior habían 30 bolsas de plástico transparente con sustancia de color beige, misma que, al ser sometida a la prueba campo, arrojó coloración positiva para cocaína base; a las 23:43 horas se la detiene en flagrancia y se le dan a conocer derechos.

Luego, se la trasladó a ella y a las sustancias hasta la Unidad donde se hace el pesaje de la droga; las 30 bolsas encontradas tenían un peso total de 30 kilos 200 gramos de cocaína base que fue levantada con el N.U.E. N° 6394478, sustancia que a posterior, fue remitida al Servicio de Salud correspondiente.

Agregó que, a la detenida en sus vestimentas, se le encontraron dos teléfonos celulares y la suma de \$175.000, en dinero en efectivo.

Reiteró que, el dueño llegó a la guardia, dijo que era dueño de la Residencia La Cabaña, llegó a la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, ubicada en Guadal N°920, comuna de Estación Central, esa dirección está a unos dos kilómetros de la residencial, están en la misma comuna, a cinco o diez minutos en auto.

En el mismo sentido anterior, Catalán Peña, indica que hechos ocurren en una residencial ubicada en calle Nicasio Retamales N°236, de la comuna de Estación Central.

A través de su atestado se incorporó **parte del set de 16 imágenes correspondiente al N°2 de los otros medios de prueba**, e indicó que en la fotografía **N°1** se aprecia el frontis de la residencial La Cabaña, ubicada en calle Nicasio Retamales N°236, de la comuna de Estación Central; en la **N°2** se ve el pasillo que va desde la entrada principal hasta las habitaciones que están al fondo de la fotografía; la **N°3** es una imagen de vigilancia en el lugar, se ve una mujer de contextura delgada, chaleco rosado y jeans celeste que ingresa, ésta luego pide la llave de la habitación N°6 y se identificó como Paulina Castillo Castillo, al momento de esta imagen explica que él estaba en el interior de la residencial, en el área

común tipo comedor; en la **N°4** se ve a la mujer que está próxima a hacer ingreso a la residencial; en la **N°5** se ven dos puertas, la del costado derecho es la habitación N°6 donde la imputada que fue detenida se hallaba pernoctando; la **N°6** es la fijación del interior de la habitación N°6 en que estaba pernoctando la imputada, se observan dos camas individuales separadas por un velador, que se nota fueron utilizadas, pues están sin hacer; en la **N°7** se observa una maleta bajo una cama, de color azul y de grandes dimensiones; indica que acorde a las investigaciones esta maleta era la que portaba la imputada y la dejó allí mientras no estaba en la habitación; la **N°8** es una fijación de la maleta, pero sacada desde debajo de la cama para mayor detalle; en la **N°9** se aprecia la maleta azul de grandes dimensiones que portaba la imputada que fue detenida, se observan dos bolsas de material sintético negro, en la parte de arriba de la maleta estaba la misma situación, de lo que recuerda sólo estaba estas especies que se ven; la **N°10** es otra fijación de la misma maleta, indica que estas bolsas que se hallaban cerradas fueron abiertas, se ve que contenían bolsas de color transparente con una sustancia amarillenta en estado seco; la **N°11** es el dinero incautado en el procedimiento que era portado por Paulina Castillo, eran \$179.000, estaban en poder de ella, en sus vestimentas, no estaban en la maleta; la **N°12** es uno de los teléfonos que fueron incautados, estaba en poder de la detenida Paulina, se incautaron dos; en la **N°17** se ven la bolsas que estaban al interior de la maleta, ya extraídas para la fijación, eran 30 bolsas de nylon transparente con polvo seco de color amarillo.

El peso total eran 30 kilos 200 gramos, levantados con el N.U.E. N°6394478.

Por su parte, **Camousseigh Ramírez**, indicó que la detenida se llamaba Paulina Alejandra Castillo Castillo, fue detenida el 30 de octubre de 2022, después que tuvieron la información del hallazgo de la maleta en la habitación N°6 en la Residencial La Cabaña, observó que dentro de tal lugar se hallaba la maleta, esto lo vio por la puerta que se encontraba entreabierta, esperaron que llegara la dueña

de la maleta, la ven llegar cerca de las 20:00 horas, luego, sale a comprar comida y cuando regresa es controlada; él la observó en la calle, en Nicasio Retamales con visión directa al ingreso a la Residencial, tenían información de la persona que fue proporcionada por el dueño de la residencial, éste les dio el nombre Paulina Castillo Castillo: luego, ese dato lo verificaron en la misma residencial, pues con ese nombre se había inscrito; agregó que, al verificar los antecedentes de esta persona mantenía anotaciones por tráfico de drogas, entre otros delitos. Puntualizó que, el total de droga incautada fueron 30 paquetes con un peso de 30 kilos 200 gramos, levantados con el N.U.E. N°6394478, dos teléfonos celulares y \$179.000 en dinero en efectivo.

Estos testigos parecieron a estos sentenciadores absolutamente verosímiles y dignos de crédito pues declararon sobre hechos que presenciaron por sus propios sentidos, se expresaron asertivamente, dando perfecta razón de sus dichos, brindándose recíprocamente la debida coherencia externa. Además, se trató de testimonios que aparecen refrendados, como se dirá, por la restante prueba incorporada por el Ministerio Público y que, por lo demás, carecen de vacíos lógicos o incongruencias que permitan abrigar una duda que mine su valor probatorio, resultando para estos magistrados útiles y necesarios para determinar la dinámica y circunstancias de los hechos acaecidos el día 30 de octubre de 2022, en cuanto a que ellos concurrieron, en virtud de una denuncia realizada en la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, a la residencial La Cabaña, ubicada en calle Nicasio Retamales N°236, de la comuna de Estación Central, percatándose que en la habitación N°6 había una maleta azul de grande dimensiones, que expelía el olor característico de droga, pudiendo luego identificar a la mujer que ingresó con tal maleta a esa habitación, incautándose al interior de bolsas nylon de color negro, 30 bolsas de nylon transparente contenedoras de una sustancia beige dubitada como pasta base de cocaína, con un peso bruto total aproximado de 30 kilos 200 gramos, poseyendo junto con tal sustancia, la suma de \$179.000, en dinero en

efectivo, en billetes de diversa denominación (según se puede apreciar en la imagen N°11 del set correspondiente al N° 2 de los otros medios de prueba).

Además, sus atestados, como se adelantó en el párrafo anterior, fueron refrendados por la evidencia fotográfica incorporada a la audiencia y se estima que emanan de personas que al no conocer a la enjuiciada, parecen carecer de motivos de inquina o animadversión como para faltar a la verdad en sus asertos, por todo lo cual se le asignará a estas probanzas pleno valor de convicción, como prueba de cargo acreditativa del hecho punible y de la intervención delictiva de la acusada, dando éstos plena razón de sus dichos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 309 del Código Procesal Penal.

Corresponde, ahora relacionar los atestados anteriores con la prueba pericial incorporada a juicio, con lo cual se puede ratificar la conclusión de encontrarnos en presencia de una sustancia prohibida, de conformidad con la Ley N°20.000 y su respectivo reglamento.

En efecto, se acompañó, de conformidad con el artículo 315 del Código Procesal Penal los **protocolos de análisis químico** realizados por la **perito** Paula Fuentes Azócar, del Instituto de Salud Pública, de las muestras N°21211-2022-M1-10, N°21211-2022-M2-10, N°21211-2022-M3-10, N°21211-2022-M4-10, N°21211-2022-M5-10, N°21211-2022-M6-10, N°21211-2022-M7-10, N°21211-2022-M8-10, N°21211-2022-M9-10 y N°21211-2022-M10-10, todos del N.U.E N°6394478, de fecha 24 de noviembre de 2022, mismos que dan cuenta las pruebas realizadas, concluyendo la existencia de cocaína base al 25%.

Asimismo, se adjuntó el informe de peligrosidad de esta sustancia y **Reservado N°21211-2022**, suscrito por Iván Fernando Triviño Angulo del Instituto de Salud Pública, que remite los protocolos de análisis antes referidos, señalando que las muestras N°21211-2022-M1-10, N°21211-2022-M2-10, N°21211-2022-M3-10, N°21211-2022-M4-10, N°21211-2022-M5-10, N°21211-2022-M6-10, N°21211-2022-M7-10, N°21211-2022-M8-10, N°21211-2022-M9-10 y N°21211-2022-M10-10, todos del N.U.E N°6394478, corresponde a pasta beige, cocaína base al 25%.

De igual modo, se adjuntó, como **prueba documental la signada con el N°1**, correspondiente al **Acta de recepción N°7925-2022**, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que da cuenta que en tal repartición, se recibió asociada a la cadena de custodia N°6394478, las sustancias que describe como pasta beige, explicitándose que el peso bruto de las muestra M1 a M10 fue de 3.026 gramos cada una; correspondiendo sus contenedores a 30 bolsas nylon, de las cuales se tomaron 10 muestras aleatorias.

Este informe pericial, se estima plena prueba, al fundarse en métodos y análisis objetivos propios de la ciencia respectiva, pudiendo determinarse científicamente en base a ellos que las sustancias incautadas el 30 de octubre de 2022, corresponden a sustancias ilícitas, sujetas a la Ley N°20.000, esto es, cocaína base, acreditándose, a través de la citada Acta de Recepción el peso bruto de la droga vinculada a los referidos informes periciales.

Se incorporó como **prueba documental la signada con el N°14** consistente en un Certificado de depósito a plazo reajutable en U.F., emitido por Banco Estado, por la suma de \$179.000 (ciento setenta y nueve mil pesos), de fecha 13 de diciembre de 2022, suma que se estima coincidente con aquella manifestada por los funcionarios que participaron en el procedimiento que culminó con la detención de la acusada, misma que fue incautada durante el operativo realizado el día 30 de octubre de 2022 a Paulina Alejandra Castillo Castillo. Lo anterior, si se une a la declaración de la acusada, quien indicó que venía a buscar droga para trasladarla a la ciudad de Antofagasta y ese era el dinero que portaba con ella, permite concluir que el dinero tiene como origen las acciones que Castillo Castillo realizaba en el tráfico de drogas y por ende, deberá tener como destino aquellos contemplados en la Ley N° 20.000.

A todo lo antes expuesto, en cuanto a la posesión de sustancias ilícitas, se deben considerar los propios dichos de la encausada quien en forma espontánea, al prestar declaración, reconoció su intervención en los sucesos, atribuyéndose la

tenencia de la droga que le fue incautada durante el procedimiento policial, señalando que ésta le adquirió de un amigo para llevarla a Antofagasta.

Quinto: Hecho acreditado. Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, el Tribunal por unanimidad ha adquirido convicción, más allá de toda duda razonable y sin contradecir la lógica, las máximas de experiencia ni los conocimientos científicamente asentados que se encuentran probados los siguientes hechos:

“El día 30 de octubre de 2022, alrededor de las 20:40 horas, al interior de la pieza N°6, de la Residencial La Cabaña, ubicada en Nicasio Retamales N°236, comuna de Estación Central, **Paulina Alejandra Castillo Castillo** mantenía en su poder, guardada debajo de una de las camas, una maleta de color azul, en cuyo interior se encontraron cuatro bolsas de un material sintético color negro, contenedoras de un total de treinta bolsas transparentes contenedoras de 30 kilos y 260 gramos de cocaína base”.

A fin de dar por establecido este hecho se tuvo en consideración la prueba testimonial, pericial, documental y los otros medios incorporados mediante exhibición, las cuales han sido estimadas por estos sentenciadores como suficientes e idóneas para formarse plena convicción de la efectividad del hecho descrito precedentemente, dada la gravedad, precisión y concordancia de los datos obtenidos de estos, máxime si no fueron desvirtuadas por antecedente alguno en contrario y que, por lo demás, fueron refrendadas por la declaración de la encausada prestada en juicio.

Sexto: Calificación jurídica del hecho acreditado: Todos los medios de prueba reseñados en la motivación cuarta que antecede, formaron plena convicción de la existencia de posesión de una sustancia prohibida, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de la Ley N°20.000, plenamente vigente en la especie.

La unión lógica y sistemática de los hechos consignados en el razonamiento que antecede, permiten calificar este presupuesto fáctico, como constitutivos de un

delito de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3° de la Ley N°20.000, en grado de consumado.

En efecto, en cuanto al delito de tráfico ilícito de drogas, la disposición legal en comento expresa que aquellas penas señaladas en el artículo primero —presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales— se aplicarán también a *“quienes trafiquen, bajo cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere”* —drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud— o con *“las materias primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias”*. Culmina dicha norma legal sosteniendo, en su inciso segundo, que *“se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas”*.

En este mismo orden de ideas, si bien es cierto que el Diccionario de la Real Academia Española entiende la expresión “traficar” en el sentido de “comerciar, negociar con el dinero y las mercancías”, la interpretación que a dicha voz le ha dado nuestra jurisprudencia es, en muchos casos, más amplia que la señalada, basándose en el alcance que se le atribuye a la expresión a *“cualquier título”*, lo que permite incluso incluir en ella actos como los de donación y, por otro lado, excluir la necesidad de acreditar un elemento subjetivo especial, como sería el ánimo de lucro.

Ahora bien, como se dijo el artículo tercero inciso segundo de la Ley N°20.000 señala qué se entiende por *“tráfico”*. Estas conductas, en todo caso, no constituyen por sí mismas delitos independientes, toda vez que dicha norma lo que busca castigar es el tráfico de estupefacientes que dicha conducta significa, o sea, y tal como lo ha señalado alguna jurisprudencia una “presunción legal que permite

establecer su existencia” (Politoff, Matus, Ramírez, *Lecciones de Derecho Penal Chileno*, Segunda edición, p. 621).

De esta forma y, razonando al tenor del tipo penal en comento, lo que el legislador ha pretendido estableciendo estas “*modalidades de tráfico*” es posibilitar el castigo por dicha actividad aun cuando sólo se haya acreditado una de las conductas que la constituyen —cualquiera de ellas— no siendo necesario, por tanto, probar que esa conducta es parte de una actividad de tráfico, hecho que se presume —entendida la presunción como la deducción a partir de antecedentes o circunstancias conocidas que en este caso es, precisamente, la concreción de dicha modalidad— o, en palabras de la ley, “se entiende” que existe.

De lo anterior, en cuanto a las modalidades de ejecución en particular, la “*posesión*” de estupefacientes consiste, en términos generales, en el hecho de tener un poder de disposición, es decir, una tenencia determinada con ánimo de señor y dueño, ya sea que esta tenencia se tenga por sí mismo o bien por otra persona a su nombre. Por lo tanto, cumple con el verbo rector quien efectivamente tiene el poder de disposición sobre las cosas de que se trata, sin perjuicio de que este poder se materialice mediante la aprehensión directa de ellas, o bien mediante su control por vías indirectas e incluso de quien, por ejemplo, es destinatario de un envío de tales sustancias. También “*posee*” quien, habiendo adquirido por compra o permuta las sustancias de que se trata, tiene sobre ellas poder de disposición, aunque no las haya recibido materialmente.

Por su parte, aunque la mera tenencia —guardar y portar— o aprehensión material de las sustancias que se tratan no es suficiente para constituir posesión, no por ello deja de constituir una modalidad de tráfico ilícito de estupefacientes, en la medida en que, según la ley, supone participación de manera directa e inmediata en dicho tráfico, por consistir en guardar o portar consigo tales sustancias. Por “guardar” sustancias estupefacientes, según el Diccionario de la Real Academia Española, debe entenderse una forma de tenencia de las mismas consistente en “tener cuidado” de ellas, “vigilarlas y conservarlas”, así como ponerlas “donde

están seguras”, y aun “conservarlas o retenerlas”. En dicho sentido, nuestra Corte Suprema ha señalado que quien guarda la droga, aunque no sea quien la comercialice, toma “parte inmediata y directa” en la realización del tráfico ilícito de estupefacientes (Sentencia de fecha 6 de septiembre de 1995 publicada en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XCII, p. 252).

Según estos razonamientos, quien tiene las sustancias estupefacientes directamente bajo su control corporal, las “porta”, lo que el Diccionario de la RAE define como “traer o llevar”, verbo al que la ley agrega la forma especial del pronombre consigo, excluyendo de este modo la tenencia por vía indirecta, que queda reservada sólo a la expresión guardar.

En el caso sometido a este Tribunal Oral, los elementos objetivos del tipo penal se encuentra acreditados por los medios de prueba y en la forma ya señalada en los considerandos precedentes de la presente sentencia, desde que la acusada fue sorprendida mientras poseía en la residencia en la cual se hospedaba una maleta contenedora de sustancias estupefacientes de aquellas prohibidas por el legislador.

Estos antecedentes son indiciarios de una conducta de tráfico, tanto por la cantidad y, también porque la droga se hallaba a granel, descrita por los funcionarios como sustancia de color beige, con un peso neto de 30 kilos doscientos sesenta gramos brutos de pasta base de cocaína con una pureza de un 25%, sustancia que podía ser comercializada en una importante cantidad de dosificaciones, lo que razonablemente excluye el tráfico en pequeñas cantidades a que alude el artículo 4 de la ley en estudio.

Establecida la conducta de tráfico en su modalidad de poseer, cabe precisar la calidad de la sustancia encontradas en poder de la acusada. A este respecto los mismos funcionarios indicaron que se trataba de droga, pues refirieron que se hizo una prueba de campo que dio coloración positiva a la presencia de cocaína. Tal circunstancia se ve refrendada, además, con la pericia química y documental incorporada que dieron cuenta de la presencia de cocaína base con una pureza del

25% y el peso bruto de la misma. Para determinar el carácter ilícito cabe indicar que el Decreto N°867 del 8 de agosto 2007, que contiene el Reglamento de la Ley N°20.000, menciona a la pasta base de cocaína, en su artículo 1, como sustancia que produce graves efectos en la salud. De esta forma se concluye que, la tenencia, transporte y eventual comercialización de pasta base de cocaína, son conductas que ponen en riesgo el bien jurídico protegido, esto es, la salud pública. Con los elementos analizados podemos sostener que nos encontramos frente al tipo penal de tráfico, cuya penalidad es la referida en el artículo 3 de la Ley N°20.000 y no del artículo 4 de la misma norma, pues pequeñas cantidades, según ha señalado la Corte Suprema en fallo de 2005, rol N°5853, es una circunstancia que debe quedar al arbitrio de los jueces, así expresamente lo señala *“son los jueces los que deben calificar según su criterio cuándo se está en presencia de tráfico o microtráfico tomando en consideración los aspectos de hecho y circunstancias de cada acción punible que conciernen a aspectos tales como cantidad, calidad o tipo de droga”*, por lo que su determinación debe fijarse con criterios que hagan sentido al objetivo de la norma propuesta, y la historia de su establecimiento da luces para ello. El mensaje del proyecto (N°232-341 de 2 de diciembre de 1999) señaló que esta ley tuvo por objeto establecer diferencias en la sanción respecto de quienes producen y comercializan grandes volúmenes de droga, utilizando varios medios y aquellos que manejan pequeñas cantidades, en tal sentido razona la Corte de Apelaciones de Antofagasta en fallo de 31 de enero de 2007 (rol N°257-2006) al indicar que el concepto *“pequeñas cantidades”* es un *principio regulativo que debe configurarse con una serie de factores, como cantidad, pureza y otros factores propios del caso*. De esta forma, si bien no se define la pequeña cantidad, la expresión es un referente para distinguir entre los grandes traficantes que utilizan medios e incluso corrompen a las autoridades, respecto de quien comercializa pequeñas cantidades en forma individual para lograr alguna forma de subsistencia. En consecuencia, para determinar los casos en que es procedente la aplicación del artículo 4 debe hacerse en relación a la

cantidad, calidad o tipo de droga, pureza, circunstancias personales del portador y contexto de la detención, exigencias que uno puede deducir del mensaje de la Ley N°20.000, del ya citado fallo de la Corte Suprema, de la sentencia ya individualizada de la Corte de Apelaciones de Antofagasta o del razonamiento de la Corte de Apelaciones Rancagua (rol N°276-2006) que exige fijarse en la cantidad, pureza y otros factores propios del caso.

Conforme a lo anterior, de acuerdo a los antecedentes expuestos en audiencia se puede concluir que la conducta se encuadra dentro de la figura del artículo 3 de la Ley N°20.000, pues, teniendo en cuenta la cantidad de droga incautada, aproximadamente 30 kilos doscientos sesenta gramos brutos de pasta base de cocaína, la forma en que esta se encontraba a granel, la suma de dinero incautada que según la acusada portaba como parte del dinero que traía para ir a buscar la droga permite razonablemente concluir que no se trataba de un comerciante de pequeñas cantidades de droga conforme lo dispone el artículo 4 de la citada ley sino que de una traficante de envergadura que obtenía cuantiosas ganancias en su obrar, manteniendo droga a granel en una cantidad significativa si se considera la multiplicidad de dosis que se podían obtener de tal sustancia.

Finalmente, la faz subjetiva del delito se encuentra dada por la conducta de la acusada quien tenía pleno y cabal conocimiento de los elementos objetivos de dicho tipo penal, no obstante ello, obró con plena voluntad en la realización de los verbos rectores del delito contemplado en el artículo 3° en relación con el artículo 1° de la Ley N°20.000, modalidades de tráfico de una sustancia prohibida por el legislador penal.

Séptimo: Participación. La calidad de **autora** de la acusada en el delito que se le atribuye se encuentra legalmente acreditada con el mérito de las inculpaciones contestes que en cada caso efectuaron los funcionarios aprehensores, donde se la reconoce como la mujer captada en las diligencias de vigilancias y que fue detenida luego de ingresar a la habitación que había arrendado, en cuyo interior se hallaba una maleta contenedora de más de 30 kilos de pasta base de cocaína,

reconocimiento que todos los deponentes realizaron sin asomo de duda o vacilación en la audiencia de juicio oral, pues en forma previa a tal sindicación se refirieron a ella en sus atestados con sus nombres y apellidos. Estos reconocimientos parecen dignos de crédito por las mismas razones esbozadas antes respecto a estos mismos testimonios. Además, estos testigos carecen de motivos de inquina o animadversión respecto de la inculpada como para faltar a la verdad en sus declaraciones acusando a esta persona de encontrarse realizando la acción previamente descrita, sin que ella estuviere realmente desarrollándola, misma que, por lo demás, aparece refrendada por los propios dichos de la acusada en estrados quien reconoció la posesión de droga.

Así las cosas, probada la hipótesis fáctica, que se encontraba poseyendo 30 kilos doscientos sesenta gramos brutos de pasta base de cocaína al momento de su detención, no cabe sino calificar su conducta como constitutiva de una hipótesis de autoría.

Octavo: De la valoración de las declaraciones de Paulina Alejandra Castillo Castillo. Que tal como se señaló en la motivación tercera que antecede la acusada renunció a su derecho a guardar silencio, reconociendo su calidad de traficante de drogas para lo cual adquirió tales sustancias de un amigo de nombre Rosamel, de nacionalidad boliviana, para luego llevarla a Antofagasta, siendo detenida por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile al interior de la residencial en la que se alojaba y en la cual mantenía una maleta con droga.

De lo expuesto y tal como se dirá más adelante al momento de analizar las circunstancias modificatorias de responsabilidad, lo cierto es que, las proposiciones fácticas, dadas por ciertas por el tribunal, resultaron refrendadas por la acusada en estrados, reconociendo explícitamente, que adquiriría droga para trasladarla a la ciudad de Antofagasta.

Noveno: Conclusión de condena. En síntesis y, atendido aquellos argumentos señalados en los considerandos precedentes de la presente resolución, tanto en lo que dice relación con la acreditación del hecho punible, la

participación culpable de la acusada y, el ilícito penal por el cual fue objeto de imputación, es que este tribunal condenará a **Paulina Alejandra Castillo Castillo**, en calidad de autora directa de un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación con el artículo 1° de la Ley N°20.000, en grado de consumado, ocurrido en la comuna de Estación Central de esta ciudad el día 30 de octubre de 2022.

Décimo: Audiencia de determinación de penas y solicitudes. Una vez dictado veredicto condenatorio y en la oportunidad prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal el Ministerio Público incorporó el Extracto de Filiación y Antecedentes de la encausada para acreditar que no beneficia a la encausada la minorante de irreprochable conducta anterior. Por lo anterior y, habiendo sido acogida, por mayoría, la minorante de colaboración sustancial al momento de comunicarse el veredicto, pide que se le imponga la pena superior del grado mínimo, esto es, la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales, multa de cien unidades tributarias mensuales, tomando en cuenta para ello lo nocivo de la droga incautada, pues que en la cantidad que fue decomisada, permitía que se realizaran miles de dosificaciones, implicando ello una mayor afectación posible al bien jurídico tutelado por la norma. Requiere, además, la toma de la huella genética, el comiso de la droga, del dinero y de los celulares incautados, ello conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley N° 20.000. No requiere costas.

La defensa de la acusada, solicitó luego del reconocimiento por mayoría de la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, contemplada en el artículo 11 N°9 del Código Penal, que se le imponga la mínima sanción posible, esto es cinco años de presidio mayor en su grado mínimo, solicitando, además, que la multa a imponer se le rebaje más allá del mínimo legal a la suma de 5 Unidades Tributarias Mensuales, porque su representada ha permanecido privada de libertad y debe considerársele como pobre para todo efecto legal y es patrocinada por la Defensoría Penal Pública, estimando que la

afectación del bien jurídico fue mínima al haber sido sorprendida antes de cualquier distribución de la droga. Por igual razón pide se le exima del pago de las costas.

Undécimo: *Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.* En lo que dice relación con la minorante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, contemplada en el artículo **11 N°9** del Código Penal se la acogerá, por mayoría, teniendo en consideración que, del examen de la prueba rendida durante el desarrollo de la audiencia, se pudo establecer una colaboración real por parte de la acusada, en que prestó declaración reconociendo su intervención en los sucesos y corroborando su posesión de la droga incautada.

Por lo anterior, estima, la mayoría, que se cumplen los tres criterios propios de esta minorante, a saber, la entrega de antecedentes relevantes; la aceleración de tiempos y, la contribución al mayor grado de convicción en la decisión.

Décimo segundo: *Determinación de la pena.* En lo que respecta al delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación con el artículo 1° de la Ley N°20.000, el título de castigo contemplado por el legislador penal es el de presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales y, concurriendo respecto de la acusada, una circunstancia modificatoria atenuante —colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos—, no se podrá imponer el grado máximo de conformidad con lo prescrito en el inciso segundo del artículo 68 del Código Penal, misma que se aplicará en su minimum y cuyo quantum se establecerá teniendo en consideración el principio de proporcionalidad de las penas y la finalidad retributiva de esta, tomando en cuenta el gran volumen de droga incautado en poder de la sentenciada, mismo que permitía miles de posibles dosificaciones.

En cuanto a la pena de multa a imponer, por mayoría, se hará uso de la facultad contenida en el inciso final del artículo 52 de la Ley N° 20.000, atendido a que la sentenciada se encuentra privada de libertad por esta causa y la forma de cumplimiento de la sanción privativa de libertad, por lo que ha de presumírsele

pobre para todos los efectos legales y, por ello, se le rebajará la multa a imponer más allá del mínimo establecido por la ley.

Décimo tercero: Penas sustitutivas. Que, en atención al quantum de la pena privativa de libertad que se impondrá a **Castillo Castillo** y, no cumpliendo ésta con el requisitos de base —temporal— de la Ley N° 18.216, no se le concederá ninguna de las penas sustitutivas contempladas en dicha normativa, debiendo cumplir la sanción impuesta en forma efectiva, sirviéndole, en todo caso, como abono los días que ha permanecido ininterrumpidamente privada de libertad por la presente causa, esto es, desde el día 30 de octubre de 2022, correspondiente a su detención y posterior prisión preventiva, según consta del auto de apertura y la certificación realizada por la Jefa de Unidad de Administración de Causas y Sala de este tribunal, con un total de **515 días**.

Décimo cuarto: Comiso de las especies incautadas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N°20.000, se decreta el comiso de la suma de \$179.000 (ciento setenta y nueve mil pesos) y de los dos teléfonos celulares incautados bajo el N.U.E. N°6394480.

Asimismo, se decreta el comiso de las sustancias ilícitas halladas en el procedimiento, levantadas con el N.U.E. N°6394478, ordenándose su destrucción y destino de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°20.000 y reglas supletorias.

Décimo quinto: Costas. Teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 593 del Código Orgánico de Tribunales y atendida la facultad que el inciso final del artículo 47 del Código Procesal Penal confiere al Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, se eximirá a Castillo Castillo del pago de las costas de la causa, considerando que actualmente se encuentra privada de libertad en la presente causa y fue representada por la Defensoría Penal Pública.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 11 N°9, 14, 15, 18, 21, 25, 28, 50, 68 y 74 del Código Penal; artículos 1, 3, 45, 46 y 52 de la ley N°20.000; artículos 1, 45, 47, 52, 295, 297, 340, 341, 342, 343, 344, 346 y 348 del

Código Procesal Penal; artículos 593 y 600 del Código Orgánico de Tribunales, se declara:

I.- Se condena a Paulina Alejandra Castillo Castillo, ya individualizada, a sufrir la pena de **siete años de presidio mayor en su grado mínimo**, accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y multa de **diez unidades tributarias mensuales (10 U.T.M.)** en calidad de autora de un delito de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación con el artículo 1°, ambos de la ley N°20.000, perpetrado el día 30 de octubre de 2022.

Para la satisfacción de la antedicha multa, se le concederá la posibilidad de pagarla en cinco cuotas mensuales y sucesivas de dos Unidades Tributarias Mensuales cada una.

La multa impuesta tendrá el destino contemplado en el artículo 46 de la Ley N°20.000. En caso de que la sentenciada no pague la multa impuesta, sufrirá por vía de sustitución, la pena de reclusión, regulándose en un día por cada tercio de unidad tributaria mensual de conformidad con el artículo 52 de la citada ley.

II.- Atendido lo razonado en la motivación décimo tercera que antecede no se le concederá a la sentenciada ninguna de las penas sustitutivas para el cumplimiento de la condena contempladas en la Ley N°18.216, debiendo cumplir efectivamente la sanción impuesta, sirviéndole de abono los **515 días** que ha permanecido privada de libertad por esta causa según consta en detalle en la citada motivación décimo tercera.

III.- Se decreta, el comiso del dinero en efectivo incautado, esto es, \$179.000 (ciento setenta y nueve mil pesos), suma que tendrá el destino señalado en el artículo 46 de la Ley N°20.000 y de los dos teléfonos celulares levantados con el N.U.E. N°6394480, remisión que deberá ser efectuada por el Ministerio Público en la oportunidad que corresponda, de conformidad a lo señalado en la motivación

décimo cuarta. De igual modo, se decreta el comiso y destrucción de la droga incautada y sus contenedores, si tal acción no se hubiere ya realizado.

IV.- Atendido lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°19.970 en relación con el artículo 40 del Reglamento del referido cuerpo legal, se ordena en este acto la determinación de la huella genética de **Paulina Alejandra Castillo Castillo**, si esta no se hubiere realizado con anterioridad, la que se llevará a efecto a partir del procedimiento contemplado en la referida Ley y el Reglamento aludido, incluyéndose una vez ejecutoriada la presente sentencia, en el Sistema Nacional de Registro de Condenados creado por dicha normativa.

V.- Se exime a la acusada del pago de las costas de la causa según lo señalado en el considerando décimo quinto que antecede.

VI.- Que habiendo sido condenada **Paulina Alejandra Castillo Castillo**, por un delito al cual la ley asigna pena aflictiva, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°18.556 modificada por la Ley N°20.568, oficiándose al efecto al Servicio Electoral, al tenor de dicho precepto, en su oportunidad, una vez ejecutoriado el presente fallo.

Se previene que la magistrado Morales estuvo por desestimar la concesión de la minorante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos que le fuera reconocida, como también la aplicación de la facultad contemplada en el artículo 52 de la Ley N°20.000.

En lo que dice relación con la minorante de responsabilidad, estima esta magistrado que, pese a que la sentenciada reconoce la existencia de los hechos que se han tenido por establecidos en este juicio, así como su participación en los mismos, el contenido de dicha declaración no aporta ningún antecedente distinto a los establecidos por los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile y se limita a reconocer lo que resulta incontrarrestable, dado el contexto de flagrancia en que se producen los hechos y, además, su relato resulta ser poco claro e impreciso en cuanto a circunstancias esenciales como la determinación del lugar en que le fue entregada la droga y quien se las entregó, pues pese a que aduce

que se la entrega “un amigo boliviano” únicamente proporciona el nombre de “Rosamel”, dato que no entrega luces respecto de su identificación ni su posible ubicación; no resultando creíble que esa persona le entregara tal cantidad de sustancias ilícitas —más de 30 kilos— sin que ella tuviese que realizar pago alguno estas drogas que tienen un valor de comercialización de a lo menos \$30.000.000; sin que, tampoco aportara ningún antecedente respecto del origen de los fondos invertidos en la operación, que le permitieron pagar su pasaje y el de otra persona, hospedarse y comprar insumos para el transporte de la droga. De igual modo, no entrega información respecto de la persona o destino de tal volumen de sustancia, pues nada indica respecto de la comercialización o entrega de la sustancia que transportaría hasta la ciudad de Antofagasta, es decir, únicamente admite todo aquello en que la prueba de cargo se basta así misma por ende, esta magistrado estima que no se cumple con la exigencia legal del carácter de sustancial que debe presentar la pretendida colaboración, al no aportarse antecedentes precisos ni concretos, más allá de la flagrancia constatada cabalmente por el personal policial.

Al desestimar tal minorante de responsabilidad y, no concurriendo modificatorias de responsabilidad, pudiendo recorrer la pena en toda su extensión, fue de la opinión de imponer la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, por estimar que tal sanción resulta acorde a la cantidad de droga incautada y sus posibilidades de dosificación y comercialización, más cuando la encartada poco tiempo antes, según su Extracto de Filiación y Antecedentes había dado cumplimiento a otra condena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio que se le impuso el día 12 de octubre de 2011, por lo que, acorde a lo dispuesto en el artículo 104 del Código Penal, no podía ser considerada como de aquellas que dan origen a una reincidencia específica, pero no se encontraba prescrita al luz del artículo 1 de la Ley N°18.216.

En lo que tocante con la rebaja de multa, más allá del mínimo legal, estima esta juez que la defensa nada aportó para dar por establecido que nos encontramos

dentro de algún caso que se pueda considerar como “calificado” para efectuar tal rebaja, más cuando nada se sabe de si efectivamente mantiene personas a su cargo y de sus recursos económicos, pudiendo a través de la presunción de pobreza eximírsela del pago de las costas, pero no entender que nos encontramos en un caso calificado de desmedro económico.

Devuélvase la prueba incorporada a los intervinientes.

En su oportunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales y artículo 468 del Código Procesal Penal, remítanse los antecedentes necesarios al competente Juzgado de Garantía de Santiago para su cumplimiento y ejecución.

La Unidad de Causas y Sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, velará por el cumplimiento del artículo 10 de la Ley N°20.285 y del acta N°44-2022 de la Excma. Corte Suprema, en lo relativo a la publicidad de la presente sentencia.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 342 del Código Procesal Penal, se deja constancia que la presente sentencia y su prevención fue redactada por la magistrado doña Rocío Morales Hernández.

RUC: N°2201076660-9

RIT : N°88-2023

Pronunciada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Santiago, integrada por los magistrados doña María Alejandra Cuadra Galarce, quien presidió la sala, doña Rocío Morales Hernández y don Pedro Suárez Nieto, la primera y el último titulares de este tribunal y la segunda titular del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Santiago, subrogando legalmente.